

Doctor
Carmen Judith Ardila Carrillo
Superintendente
Superintendencia de Industria y Comercio
Ciudad

Asunto: Comentarios a proyecto de Circular para adicionar un Capítulo Tercero al Título V de la Circular Única

Estimado Superintendente,

Reciba nuestro más cordial saludo de parte de CREDIBANCO SA y nos permitimos presentar nuestros comentarios respecto al proyecto de la "Circular para adicionar un Capítulo Tercero al Título V de la Circular Única.

El uso, adopción y apropiación de las TIC se encuentra altamente determinado por decisiones de política pública que limiten la confianza y el alcance de estas. En ese sentido, los responsables de la formulación de políticas públicas deben tener claro el impacto de sus decisiones en particular el costo enorme de tener un freno digital para toda la economía de Colombia.

Hoy en día, el total de usuarios de internet a nivel global está alrededor 3,200 millones de así como en el 2022 más de 25 mil millones de "cosas" conectadas (IoT) en los hogares de países de OECD, que, con soluciones de Big Data, Cloud Computing, Artificial Intelligence, Robótica y Open Data, requieren el libre flujo de información transfronteriza, para mayor beneficio de todos los usuarios.

Además, se ha evidenciado un importante crecimiento del e-commerce en Colombia, por cuanto se estima que las transacciones por internet representan un 2,6% del PIB. De acuerdo con un estudio de Visa y Euromonitor se calcula que en el 2015 las ventas en tiendas virtuales alcanzaron los US\$3.100 millones, el cual equivale un crecimiento de 18% respecto con el año 2014, cuando las ventas reportadas llegaron a US\$2.620 millones. Por lo anterior, se podría esperar un crecimiento en el e-commerce nacional de los US\$5.000 millones en 2018. Fenómenos como el Cyberlunes confirman el aumento y la confianza en el volumen de transacciones y pagos en línea.

Debido al acceso a internet, prácticamente no existe modelo de negocio que no utilice y se beneficie de la posibilidad de mover datos más allá de sus fronteras naturales. La transferencia de datos no se limita al portafolio de las compañías TIC, sino hace parte del día a día de cualquier empresa que quiere hacer negocios de manera eficiente. Por esto mismo, cualquier regulación, normatividad e impuesto tiene que dimensionar y valorar el costo beneficio de su impacto en un contexto en que la economía digital crece todos los días tal y como lo afirma la OCDE, por cuanto puede precisamente establecer barreras que impidan el desarrollo del comercio y la competencia.

1. Comentarios al artículo 3.1.

Si bien es cierto que la Ley 1581 de 2012 estableció que “Se entiende que un país ofrece un nivel adecuado de protección de datos cuando cumpla con los estándares fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia”, estos estándares deben sujetarse a las reglas que dio la Corte Constitucional en sentencia C-748 de 2011, que definió el alcance de aplicación de dicho artículo con miras de ser exequible.

En esa medida, la Corte Constitucional estableció dos estándares para entender que *“un país cuenta con los elementos o estándares de garantía necesarios para garantizar un nivel adecuado de protección de datos personales, si su legislación cuenta con unos principios, que abarquen las obligaciones y derechos de las partes (titular del dato, autoridades públicas, empresas, agencias u otros organismos que efectúen tratamientos de datos personales), y de los datos (calidad del dato, seguridad técnica) y; con un procedimiento de protección de datos que involucre mecanismos y autoridades que efectivicen la protección de la información”*.

En esa medida, sugerimos que los estándares que establece la SIC se restrinjan a lo previsto por la Corte Constitucional, ya que el proyecto de Circular dispone de requisitos en exceso. Por tal motivo, sugerimos la siguiente redacción:

- “a) Existencia de normas aplicables al tratamiento de datos personales.*
- b) Existencia de principios aplicables al Tratamiento de datos.*
- c) Existencia de derechos de los Titulares.*
- d) Existencia de deberes de quienes realicen el tratamiento de datos.*
- e) Existencia de procedimientos para garantizar la protección de la información, los cuales prodrán ser administrativos, judiciales, extrajudiciales o privados.*
- f) Existencia de autoridad (es) encargada (s) de protección de datos personales o de privacidad”*.

2. Comentarios al artículo 3.2.

En cuanto al artículo 3.2. encontramos que esa lista de países que que garantizan un nivel adecuado de protección no reconoce otros países que cumplen ya con esos estándares y que deben ser incluidos. La Superintendencia de Industria y Comercio, como su nombre lo dice, tiene dentro de sus más profundos pilares el de promover y facilitar el comercio y la industria, en el mejor interés de los colombianos. No puede abstraerse de esta misión, independientemente de que sea una autoridad de protección de datos.

Al negar la inclusión en esta lista de los principales países socios de Colombia (tanto para el sector público como privado) con los que Colombia realiza comercio transfronterizo de bienes y servicios, así como intercambios Estado - Estado, significa un enorme muro legal a que ese dicho comercio continúe realizándose. Esto sería un nefasto mensaje por parte de Colombia sobre la transparencia y confianza que deben primar en las relaciones comerciales transfronterizas. La decisión de la SIC puede tener graves efectos, por lo cual



esta no puede tomarse en abstracto sino haciendo primar el interés general. El sector privado colombiano estaría siendo afectado, se reduce su productividad en las exportaciones y disminuiría su potencial de importaciones. Igualmente, el sector público se vería rezagado por la imposibilidad de continuar beneficiándose de los productos proporcionados por compañías de países de tradición no europea.

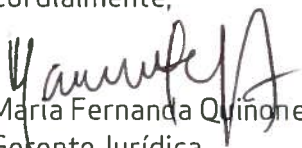
Adicionalmente, debe tomarse en consideración el impacto que este tipo de medidas causa al limitar a la industria nacional tener acceso a soluciones tecnológicas de vanguardia en términos de calidad y eficiencia, como lo son las soluciones de almacenamiento en la nube. El almacenamiento y procesamiento en la nube es lo que hoy en día hace viable y competitivos muchísimos de los nuevos negocios de la era digital, y el principal mercado proveedor de dichas soluciones en nuestro hemisferio es Estados Unidos. Restringir que Colombia no pueda tener acceso a los servicios de hosting en EEUU es afectar severamente la competitividad de nuestras industrias de base tecnológica.

La Ley 1581 le otorga a la Superintendencia de Industria y Comercio facultades para determinar el estándar o criterios para establecer los niveles adecuados de protección de datos personales, lo cierto es que no hace referencia a un único modelo (europeo) sino que le da suficiente campo a la entidad para que defina cuál es el mejor de los estándares, el que más conviene a Colombia y sus residentes y ciudadanos. Precisamente porque la Ley de Datos Personales no limita y obliga a Colombia a adoptar los criterios y estándares europeos. Inclusive, la Superintendencia tiene la gran labor de evaluar todas las opciones (que la misma OECD ha reconocido como opciones válidas para garantizar el flujo transfronterizo de información) que están disponibles con el fin de que el país continúe facilitando el comercio transfronterizo con los países que son sus principales aliados comerciales, y con todos aquellos otros países que son aliados potenciales.

No tiene ningún sentido que la SIC introduzca en la lista países con los que Colombia no tiene mayor relación y cuyo impacto en el comercio es mínimo, solo por el hecho de que son países europeos. En cambio dejar por fuera a países como EEUU, Brasil, Chile, Rusia o China. La visión no puede basarse en la mera formalidad de cumplir unos requisitos sino en la materialidad de la protección y la seguridad de la información.

Agradecemos su atención,

Cordialmente,


María Fernanda Quíñones Zapata
Gerente Jurídica
CREDIBANCO S.A